



GD-F-008 V.9

Página 1 de 15

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010039185 DEL 28/03/2017

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300023445 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 mediante la cual *“se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5 del Decreto 1077 de 2015, estableció que *“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007”*.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300023445 del 24 de marzo del 2017, delegó en el Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el MUNICIPIO DE DUITAMA – BOYACÁ es de categoría 3 y al no haber sido prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010052895 del 30 de septiembre de 2016, la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo decidió DESCERTIFICAR al MUNICIPIO DE DUITAMA – BOYACÁ, por no haber cumplido el siguiente requisito establecido en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015:

- *“Reporte en el SUL de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida” (aspecto “Aplicación de la estratificación socioeconómica, conforme a la metodología nacional establecida”).*



C014/5927



C014/5927

La referida resolución se notificó por aviso el 11 de noviembre de 2016.

El Municipio de DUITAMA – BOYACÁ, mediante escrito radicado bajo el número 20165290804642 de 24 de noviembre de 2016, interpuso oportunamente recurso de reposición contra la resolución de descertificación.

Posteriormente, mediante escrito radicado bajo el No. 20165290813642 de 29 de noviembre de 2016 el ente territorial presentó escrito de idéntico contenido al radicado No. 20165290804642 de 24 de noviembre de 2016, pero extemporáneo, por lo cual no será objeto de pronunciamiento de fondo en la presente resolución.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1 De los argumentos del recurso de reposición

El recurrente presentó argumentos los cuales son resumidos por el Despacho de la siguiente forma:

2.1.1 Manifestó que lo señalado en la resolución de descertificación dista de la realidad toda vez que se aportó la información requerida por el Decreto 1077 de 2015 pero por su redacción fue analizada de una forma incongruente con la realidad municipal.

2.1.2 Indicó que existió una presunción legal omitida por el Despacho, toda vez que la normatividad señalada en la certificación inicial está vigente, los decretos de adopción de la estratificación fueron proferidos por el alcalde municipal y esta última ha sido aplicada por el ente territorial, lo que conlleva a que al leer el documento inicialmente reportado al SUI se pueda interpretar lo exigido por la norma, máxime cuando la ley contempla la existencia de una sola estratificación en el municipio sancionada por el decreto de adopción de la misma y que está vigente, no existiendo posibilidad alguna de coexistencia de dos estratificaciones. Añadió que lo señalado conlleva a tener claro que la metodología aplicada dentro de la adopción de la estratificación decretos vigentes en el periodo a certificar se encuentra conforme a la metodología nacional establecida.

Agregó que el artículo 101.4 de la Ley 142 de 1994 señala que en cada municipio existirá una sola estratificación de inmuebles residenciales aplicables a cada uno de los servicios públicos lo que permite presumir que no existen más estratificaciones aplicadas para la vigencia 2015 y de esta forma solo hay una interpretación de la certificación aportada por el municipio.

2.1.3 Alegó que en la resolución recurrida se incurrió en una ilegalidad por falsa motivación toda vez que se puso en tela de juicio la competencia del funcionario que suscribió la certificación quien lo hizo como *“técnico de estratificación”* y utilizó la palabra *“manifestarle”* como sinónimo de *“certificar”*. Adujo que conforme al Decreto 122 de 2016 se le asignaron funciones a dicho funcionario como Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación, por lo cual el documento reportado corresponde al exigido por la norma.

Afirmó que la entidad realizó una *“interpretación leguleya”* y poco exégeta del decreto reglamentario lo que limita el derecho del interés superior contemplado que es que se dé constancia que existe una estratificación municipal adoptada y aplicada de acuerdo a la normatividad vigente.

2.1.4 Manifestó que teniendo en cuenta que *“al tratarse de una situación más de forma del documento, que, de fondo y debido a que esta situación se genera por las capacidades de interpretación del evaluador, la presunta irregularidad, también debió ser objeto de verificación por parte de la entidad mediante auto de pruebas”*, ya que no se permitió controvertir las aseveraciones ni aclarar la situación presentada o allegar las correcciones pertinentes en la oportunidad procesal pertinente. Alegó con su recurso de reposición una certificación y el decreto de funciones del técnico de estratificación, manifestando que con esta se corrige y aclara los posibles errores señalados en la decisión recurrida.

2.1.5 Alegó que el proceso de certificación del SGP – APSB constituye una función jurisdiccional asignada a la Superintendencia de Servicios Públicos, que por ende la Entidad debe agotar cada etapa que se contempla en este tipo de actuaciones y que el Decreto 1077 de 2015 es una norma sustancial, por lo que debió utilizarse para el proceso adelantado las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y del Código General del Proceso (CGP).

2.1.6 Señaló que la Entidad no puede pretender que se cumpla expresamente lo solicitado en una norma de jerarquía inferior a todo el ordenamiento legal que compone un proceso administrativo, no obstante tampoco podía obviar las etapas probatorias, ni el hecho de aclarar dudas de interpretación que se suscitaban en el proceso, omitiendo mencionar, previamente a la expedición de la resolución, las irregularidades encontradas y que la información se reportó oportunamente, ya que conforme al artículo 170 del CGP cualquier tipo de situación que pudiese inferir en la decisión del proceso de certificación debía acreditarse mediante auto de pruebas.

2.1.7 Concluyó que se profirió una decisión sin la totalidad de las pruebas requeridas para tal efecto, que se desatendieron los postulados favorables de los subrogados legales, vulnerando los principios de interpretación contemplados en el artículo 103 del CPACA y los derechos al debido proceso, a la igualdad, eficacia, defensa, transparencia, representación, imparcialidad, contradicción y lealtad.

2.1.8 Agregó que en el diagnóstico publicado en la página web de la entidad, el 02 de mayo de 2016, se tuvieron por cumplidos los requisitos sin observación que permitiera advertir la irregularidad en el reporte y corregirla, con lo que se muestra un comportamiento doloso por parte de la Superintendencia quien no develó los posibles yerros en el reporte de información advirtiendo la incompatibilidad técnica respecto del formato reportado y la capacidad de lectura del ente evaluador.

2.1.9 Manifestó que se violó el derecho fundamental a la igualdad, toda vez que a otros municipios se le brindó la oportunidad de aclarar en una etapa probatoria la certificación reportada inicialmente por estos y ello conllevó a que fuera certificados, no obstante al Municipio de Duitama se le dio un trato discriminatorio negándole ese privilegio antes de emitir la resolución de descertificación sin considerar que se trataba de un municipio de sexta categoría, aislado por la carente infraestructura vial de acceso sin fuente suficiente de generación de recursos y sin embargo diligente en el cumplimiento de sus obligaciones legales.

2.1.10 Alegó que la Superintendencia, conocedora de su situación precaria en la prestación de servicios públicos, negó las oportunidades procesales que le brindó a otros municipios que cuentan con mejores condiciones económicas y sociales, teniendo para el ente territorial condiciones más drásticas y exegéticas y que de haberse tratado con igualdad el municipio hubiese obtenido el manejo de los recursos del SGP APSB ya que se trató del mismo error presentado con los otros entes territoriales

2.1.11 Adujo que la decisión adoptada es más técnica que jurídica y que ocasiona perjuicio a toda la comunidad ya que al ser descertificada nuevamente presentara un atraso respecto de una adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, toda vez que existe distancia entre el municipio y el departamento y la desatención de este último respecto a las necesidades de la comunidad representa el atraso de un año más *“(en el mejor de los casos)”*, respecto a la satisfacción de sus necesidades en cuanto a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Concluyó que la *“sesgada interpretación desarrollada por el ente evaluador”* conllevó a ocasionar un perjuicio real respecto a la aplicación del decreto reglamentario con supremacía a las formas al interés general de la comunidad de Duitama.

2.1.12 Afirmó que con relación al aspecto *“Aplicación de la estratificación socioeconómica, conforme a la metodología nacional establecida”*, la Superintendencia asume una postura restrictiva del derecho ya que da por no cumplido el requisito bajo presupuestos que contravienen los principios de interpretación normativos señalados omitiendo la finalidad del

requisito en cuestión que tendría por cumplido el aspecto con base en el acatamiento de los tres requisitos que lo conforman.

2.1.13 Solicitó se analizara la situación particular de municipio de Duitama el cual pertenece a la tercera categoría y haga aplicación de su carácter garantista respecto a la interpretación documental del municipio ya que la descertificación constituye y genera perjuicio respecto a la efectividad y garantía de la prestación de servicios públicos domiciliarios.

2.1.14 Solicitó que se tenga por cumplido el requisito cuyo falta de acreditación fundamentó de la descertificación, se revoque la decisión de descertificar al ente territorial, que se aclare el criterio de interpretación legal reunido para los encargados de la revisión documental de los actos administrativos nacidos en derecho y se certifique al municipio de Duitama para el manejo de recursos del SGP APSB vigencia 2015.

2.2 De las pruebas aportadas por el recurrente

El ente territorial aportó con su recurso de reposición los siguientes documentos:

- Certificación expedida el 23 de noviembre de 2016 por la Secretaría de Planeación y del Comité Permanente de Estratificación del Municipio de Duitama mediante la cual manifiesta que *"LA ESTRATIFICACIÓN ADOPTADA Y APLICADA DENTRO DEL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA 2015 ESTUVO CONFORME A LA METODOLOGÍA NACIONAL TIPO I ESTABLECIDA"*.
- Copia del Decreto No. 122 de 26 de enero de 2016 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE NOMBRA AL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN MUNICIPAL Y SE DESIGNAN DICHAS FUNCIONES AL CARGO DE TÉCNICO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS VECES"*.

Los anteriores documentos con su valor legal se incorporan al expediente.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta Superintendencia Delegada procederá a analizar los argumentos expuestos, de la siguiente manera:

3.1 De su cumplimiento al requisito de reporte de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación

Manifestó que lo señalado en la resolución de descertificación dista de la realidad toda vez que se aportó la información requerida por el Decreto 1077 de 2015 pero por su redacción fue analizada de una forma incongruente con la realidad municipal.

Indicó que existió una presunción legal omitida por el Despacho, toda vez que la normatividad señalada en la certificación inicial está vigente, los decretos de adopción de la estratificación fueron proferidos por el alcalde municipal y esta última ha sido aplicada por el ente territorial, lo que conlleva a que al leer el documento inicialmente reportado al SUI se pueda interpretar lo exigido por la norma, máxime cuando la ley contempla la existencia de una sola estratificación en el municipio sancionada por el decreto de adopción de la misma y que está vigente, no existiendo posibilidad alguna de coexistencia de dos estratificaciones. Añadió que lo señalado conlleva a tener claro que la metodología aplicada dentro de la adopción de la estratificación decretos vigentes en el periodo a certificar se encuentra conforme a la metodología nacional establecida.

Señaló que en la resolución recurrida se incurrió en una ilegalidad por falsa motivación toda vez que se puso en tela de juicio la competencia del funcionario que suscribió la certificación quien lo hizo como *"técnico de estratificación"* y utilizó la palabra *"manifestarle"* como sinónimo de *"certificar"*. Adujo que conforme al Decreto 122 de 2016 se le asignaron funciones a dicho funcionario como Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación, por lo cual el documento reportado corresponde al exigido por la norma.

Afirmó que la entidad realizó una “interpretación leguleya” y poco exégeta del decreto reglamentario lo que limita el derecho del interés superior contemplado que es que se dé constancia que existe una estratificación municipal adoptada y aplicada de acuerdo a la normatividad vigente.

Alegó que con relación al aspecto “Aplicación de la estratificación socioeconómica, conforme a la metodología nacional establecida”, la Superintendencia asume una postura restrictiva del derecho ya que da por no cumplido el requisito bajo presupuestos que contravienen los principios de interpretación normativos señalados omitiendo la finalidad del requisito en cuestión que tendría por cumplido el aspecto con base en el acatamiento de los tres requisitos que lo conforman.

Con relación al argumento en estudio, este Despacho se permite manifestar lo siguiente:

La norma ha sido clara para regular las vigencias, los requisitos de certificación y los plazos para proceder acreditar los mismos. En efecto, el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015 establece, con relación al requisito que nos ocupa, lo siguiente:

<p><i>“Aplicación de la estratificación socioeconómica, conforme a la metodología nacional establecida”</i></p>	<p>“(…)</p> <p><i>“(iii) Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida” (…)</i></p>
---	--

Ahora bien, se debe tener en cuenta que conforme al artículo 2.3.5.1.2.1.10 del Decreto 1077 de 2015, el proceso de certificación corresponde a una **actuación administrativa** atinente a la verificación que debe hacer la Superintendencia de Servicios Públicos del cumplimiento por parte de los municipios a los requisitos establecidos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 (municipio no prestador directo) y 2.3.5.1.2.1.7 (municipio prestador directo) del Decreto 1077 de 2015, según lo dispone el artículo 2.3.5.1.2.1.5 *ibídem*, con el fin de establecer si dichos ente territoriales administrarán o no los recursos del SGP – APSB para cada vigencia.

En este orden de ideas, es claro que el ente territorial tiene la obligación de cumplir unos requisitos taxativamente establecidos en las normas citadas dentro de un término establecido. Para el caso concreto, vigencia 2015, el MUNICIPIO DE DUITAMA – BOYACÁ, al no haber sido prestador de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, debió acreditar por expreso mandato normativo, los requisitos señalados en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015, antes del 30 de abril de 2015, según lo establecido en el artículo 2.3.5.1.2.1.9 *ibídem*.

En este sentido, este Despacho, en cumplimiento de sus funciones legales, tiene el deber de verificar el acatamiento de dichos requisitos y una vez adelantada esta verificación advirtió que la certificación reportada por el municipio no cumplía estrictamente lo señalado en la norma por lo que dicho hallazgo era suficiente para descertificar al municipio de plano, según lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015.

En efecto, teniendo en cuenta que la norma claramente especifica la información que debe contener el documento a reportar por el ente territorial, a saber “que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida” y que sea proferida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación o quien haga sus veces, se constató que el documento reportado por el municipio correspondió a un oficio mediante el cual el señor Pablo Goyeneche quien aduce la calidad de “Técnico Estratificación”

le manifiesta a un asesor de Planeación del municipio que *“la Metodología aplicada para la estratificación del municipio de Duitama es la tipo 1 para la vigencia 2015”*, tal y como se observa a continuación:

Duitama 01 de marzo de 2016

Doctor:

SANTOS MARIA COMBARIZA SANTAMARIA.
Asesor de planeación.

Asunto: Solicitud de información para cargar al SUI.

Cordial saludo doctor Santos María.

En respuesta a su solicitud me permito manifestarle que la metodología aplicada para la estratificación del municipio de Duitama es la tipo 1 para la vigencia 2015.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


PABLO GOYENECHÉ G.
Técnico Estratificación.

En efecto, el citado documento no cumplió lo establecido en la norma, por lo que el ente territorial debía ser descertificado.

Ahora bien, contrario a lo manifestado por el ente territorial, no existe presunción legal alguna que se haya podido tener en cuenta para el requisito incumplido, toda vez que debe recordar el ente territorial que este tipo de presunciones **se establece por ley** y contrario a lo afirmado por el municipio, el legislador no estableció presunción alguna para el asunto en concreto.

Entonces, es claro que no por el hecho que el ente territorial reporte otros documentos al SUI se puede dar el alcance que pretende el recurrente y tener por cumplido un requisito que evidentemente fue incumplido, máxime cuando el Decreto 1077 de 2015 **estableció claramente el documento a reportar, el contenido del mismo y la autoridad que debe expedirlo** y aun así el ente territorial se abstuvo de reportarlo conforme a lo exigido en la norma, en razón a lo anterior el ente territorial debió recibir las consecuencias de su omisión y ser descertificado.

A su vez, al no existir vacío alguno en la misma, no es dable interpretar en un sentido distinto lo exigido expresamente por el Decreto 1077 de 2015, máxime cuando para la instancia de evaluación de requisitos fue evidente que el documento reportado no se trataba de una certificación y que no había sido expedido por la autoridad establecida en la norma para tal efecto.

Por otra parte, llama la atención que el ente territorial, con ocasión al recurso de reposición pretende subsanar la situación de incumplimiento presentada, alegando una supuesta ilegalidad por falsa motivación que es inexistente, en razón a que la resolución de descertificación fue proferida conforme a derecho siendo claro que el ente territorial no reportó la certificación en cuestión y no acreditó la calidad de quien suscribió el oficio reportado, ni siquiera quien firma el oficio aduce la calidad de Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación, exigida por la norma.

En este orden de ideas, es solo con el recurso de reposición que el municipio aporta la acreditación del funcionario que suscribió el oficio reportado al SUI, siendo esta instancia en la que se pone en conocimiento que el funcionario ostentó la calidad de Secretario del Comité Permanente de Estratificación, tal y como se verá más adelante.

Bajo esta misma situación se evidencia que el ente territorial hace manifestaciones irrespetuosas dentro de las cuales indica que dentro de la resolución de descertificación se hizo

una "interpretación leguleya" del decreto reglamentario que limita el derecho superior contemplado, respecto a lo cual se debe señalar que el acto administrativo recurrido fue proferido tras un estudio profundo y objetivo resultado de contrastar cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015 con el reporte de información que hizo el municipio al SUI.

Por lo anterior, se llama la atención del apoderado del ente territorial, quien no puede utilizar afirmaciones como las hechas en su escrito de recurso de reposición, por el solo hecho de estar en desacuerdo con una decisión proferida por el Despacho o bajo el pretexto de hacer valer sus afirmaciones.

En este contexto, es preciso recordar al apoderado del municipio, que según lo dispuesto por los numerales 2 y 4 del artículo 78 del Código General del Proceso, entre los deberes de las partes y sus apoderados se encuentran los de:

"2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales.

(...)

4. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de este, a las partes y a los auxiliares de la justicia".

Por lo anterior, el apoderado **no** puede, so pretexto del ejercicio del derecho a la defensa de su representada, hacer imputaciones temerarias e irrespetuosas.

Sobre el punto particular del debido respeto que deben prodigar las partes a la administración de justicia, recuerda este Despacho al apoderado que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha sido reiterativa en señalar[1]:

"(...) El artículo 50 del Decreto 196 de 1971, cuyo texto reza:

'Artículo 50.- Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia, las injurias y las acusaciones temerarias contra los funcionarios, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar comedidamente; por los medios competentes, las faltas cometidas por dichas personas.

El responsable de una de estas faltas incurrirá en amonestación, censura o suspensión".

(...) El citado precepto normativo protege el debido respeto que debe tenersele, entre otros, a la administración de justicia, representada por los órganos competentes establecidos por la Constitución y la ley, asegurando de esta forma, su respetabilidad por quienes intervienen en los diversos asuntos sometidos a su consideración.

*(...) El abogado en el ejercicio de la función social de la profesión, a que se contrae el artículo 1º del decreto 196 de 1971, según el cual "La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia", **asume responsabilidades que le exigen ser respetuoso con quienes intervienen en la realización de esa labor, pero especialmente con los funcionarios que representan al Estado en la aplicación de la ley a los casos particulares.***

*Dentro de los deberes del abogado que contempla el artículo 47 del Estatuto Forense se encuentran el de **observar y exigir mesura; el de la seriedad y el respeto debidos en la interacción con los funcionarios judiciales, con los colaboradores y auxiliares de la justicia, con la contraparte y sus abogados y con las demás que intervengan en los asuntos de su profesión. Lo cual implica entre otros comportamientos, el uso en sus escritos de un lenguaje cauteloso y ceñido a la severidad jurídica, sin que puedan aceptarse válidamente las aseveraciones que impliquen acusaciones infundadas o temerarias** o expresiones injuriosas en contra de los administradores de justicia y las demás partes dentro del proceso.*

(...)

No puede desconocer esta Colegiatura que el ejercicio del derecho está al servicio tanto de la administración de justicia como de las personas que buscan la defensa de sus intereses dentro de cada uno de los procesos y que precisamente la controversia y el

debate son la esencia de los compromisos adquiridos por los abogados, pero todo ello debe situarse dentro del marco del respeto por los demás y especialmente de los funcionarios que están investidos de la facultad de dirimir los conflictos, pues, como acertadamente lo refirió el a quo, actuar de manera diversa conlleva a la barbarie.

(...)

Las decisiones judiciales, aún con la posibilidad de que se dicten por fuera de los márgenes de la Constitución y de la Ley, deben ser acatadas y como admiten su censura, ésta debe estar precedida de la elegancia y los buenos modales, pues no se requiere calificar de tramposa o mezquina una decisión, para que el superior funcional de quien la emitió, logre comprender que la misma carece de la fundamentación necesaria o que está dictada con fundamento en pruebas irregularmente recogidas o aportadas, pues ello desdice del honor, el buen nombre y la reputación jurídica de quien, como la Fiscal 37 analizó los mencionados medios de convicción y les dio un valor sujeto a controversia.

(...)

Por consiguiente, este Despacho no comparte lo señalado por el apoderado y lo requiere con el fin que en las actuaciones que adelante ante el Despacho se dirija con respeto a esta autoridad administrativa.

Ahora bien, conforme a lo señalado anteriormente, es claro que no se adoptó una postura restrictiva del derecho toda vez que el incumplimiento del municipio, daba lugar a descertificar al ente territorial con independencia que este hubiera dado cumplimiento a los demás requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, toda vez que la norma exigió que se diera cumplimiento a TODOS los requisitos aplicables al ente territorial y no a algunos de estos.

En este orden de ideas, es claro el principio a saber: “*DONDE LA LEY NO DISTINGUE NO LE ES DADO AL INTERPRETE HACERLO*”, y en este sentido, si la norma no estableció excepción o distinción alguna para acreditar el cumplimiento de los tres criterios que componen el aspecto “*Aplicación de la estratificación socioeconómica, conforme a la metodología nacional establecida*”, al evidenciar que no se acató uno de ellos por el ente territorial, la única consecuencia era la descertificación.

Por consiguiente, conforme a lo expuesto, el argumento en comento no está llamado a prosperar.

3.2 Del argumento del ente territorial relacionado con la supuesta omisión del Despacho al no haber decretado pruebas una vez advirtió la falencia en la certificación del Comité Permanente de Estratificación y de la violación a principios del derecho.

Manifestó que teniendo en cuenta que “*al tratarse de una situación más de forma del documento, que, de fondo y debido a que esta situación se genera por las capacidades de interpretación del evaluador, la presunta irregularidad, también debió ser objeto de verificación por parte de la entidad mediante auto de pruebas*”, ya que no se permitió controvertir las aseveraciones ni aclarar la situación presentada o allegar las correcciones pertinentes en la oportunidad procesal pertinente. Alegó con su recurso de reposición una certificación y el decreto de procesamiento del técnico de estratificación, manifestando que con esta se corrige y aclara los posibles errores señalados en la decisión recurrida.

Alegó que el proceso de certificación del SGP – APSB constituye una función jurisdiccional asignada a la Superintendencia de Servicios Públicos, que por ende la Entidad debe agotar cada etapa que se contempla en este tipo de actuaciones y que el Decreto 1077 de 2015 es una norma sustancial, por lo que debió utilizarse para el proceso adelantado las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y del Código General del Proceso (CGP).

Señaló que la Entidad no puede pretender que se cumpla expresamente lo solicitado en una norma de jerarquía inferior a todo el ordenamiento legal que compone un proceso administrativo, no obstante tampoco podía obviar las etapas probatorias, ni el hecho de aclarar dudas de interpretación que se suscitaban en el proceso, omitiendo mencionar, previamente a la expedición de la resolución, las irregularidades encontradas y que la información se reportó oportunamente, ya que conforme al artículo 170 del CGP cualquier tipo de situación que

pudiese inferir en la decisión del proceso de certificación debía acreditarse mediante auto de pruebas.

Concluyó que se profirió una decisión sin la totalidad de las pruebas requeridas para tal efecto, que se desatendieron los postulados favorables de los subrogados legales, vulnerando los principios de interpretación contemplados en el artículo 103 del CPACA y los derechos al debido proceso, a la igualdad, eficacia, defensa, transparencia, representación, imparcialidad, contradicción y lealtad.

Agregó que en el diagnóstico publicado en la página web de la entidad, el 02 de mayo de 2016, se tuvieron por cumplidos los requisitos sin observación que permitiera advertir la irregularidad en el reporte y corregirla, con lo que se muestra un comportamiento doloso por parte de la Superintendencia quien no develó los posibles yerros en el reporte de información advirtiendo la incompatibilidad técnica respecto del formato reportado y la capacidad de lectura del ente evaluador.

Con relación al argumento en estudio, este Despacho se permite señalar lo siguiente:

Tal y como se expuso al analizar el primer argumento, la certificación requerida por la norma, consistía en el único documento que debía ser aportado en los términos establecidos en el Decreto mencionado, so pena de incumplir el requisito en cuestión y teniendo en cuenta que el ente territorial omitió el cumplimiento a cabalidad del requisito *"Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida"*, fue descertificado.

Ahora bien, llama la atención del Despacho la afirmación del recurrente quien si bien acepta que la certificación inicialmente reportada no cumplía con la norma, pretende trasladar su responsabilidad a este al Despacho, quien a juicio del municipio, debió abrir un periodo probatorio, decretando pruebas de oficio, destinadas a subsanar el error en que incurrió el ente territorial. Este argumento evidencia que el municipio pretende exculparse del incumplimiento en cuestión en su propia culpa, respecto a lo cual, la Corte Constitucional en Sentencia No. C-083-95, en relación con el principio NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINE ALLEGANS / PRINCIPIO *"NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA"*/PRINCIPIO DE LA BUENA FE, ha sostenido:

"... No hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar de ella algún beneficio, falta a la buena fé entendida como la ausencia de dolo, la conciencia de que el comportamiento que se observa es conforme al derecho, y los fines que persigue están amparados por éste..."

En este orden de ideas, no es válido que el recurrente reconozca la propia culpa con el fin de derivar un beneficio trasladando su responsabilidad por un incumplimiento a la administración, tal y como sucedió en el caso concreto.

Por su parte, es de precisar que la facultad de la administración de decretar pruebas es potestativa y no obligatoria; máxime cuando se reitera nuevamente que el simple reporte del ente territorial conllevaba a evidenciar un incumplimiento a uno de los requisitos establecidos dentro del proceso de certificación, lo que bastaba para descertificarlo según lo señalado en el Decreto 1077 de 2015.

Sobre este punto, se debe precisar al ente territorial que el proceso adelantado para el caso concreto no corresponde al desarrollo de facultades jurisdiccionales por parte de esta Entidad, sino a una actuación administrativa adelantada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4º de la Ley 1176 de 2007 mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, a su vez regulado por el artículo 2.3.5.1.2.1.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015.

A su vez debe recordar el recurrente que existe una prevalencia de la ley especial sobre la general y por ende, en lo referente a la facultad como tal de decretar pruebas, no es necesario en esta instancia acudir al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo (que en todo caso establece un carácter discrecional en dicha facultad) cuando el artículo 2.3.5.1.2.1.11 del Decreto 1077 de 2015 la regula en el proceso que nos ocupa:

“Artículo 2.3.5.1.2.1.11. (...) la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto de todos los requisitos establecidos para el proceso de certificación, podrán dentro del marco de sus competencias y por cualquier medio, entre otras cosas, solicitar soportes adicionales para confrontar la información reportada al SUI y al FUT, con otras fuentes y decretar pruebas adicionales para comprobar la consistencia de la información suministrada”.

Tal y como se observa la administración podrá pedir soportes adicionales y decretar pruebas para confrontar información o para comprobar la consistencia de la información suministrada, pero conforme a lo expuesto previamente, ello no fue necesario para el caso concreto, toda vez que no existió duda en que el ente territorial reportó un documento que no cumplía cabalmente por la norma.

Por su parte el Despacho se permite ser enfático que no estaba a cargo de la Superintendencia el deber de buscar la subsanación del error que según el recurrente se presentó para el caso concreto, máxime cuando no se trató de un error formal sino de fondo y toda vez que está en el resorte del administrado conocer y aplicar la norma y en su responsabilidad está el asumir las consecuencias que deriven de su incumplimiento, las cuales se traducen en la descertificación, como sucedió en el caso concreto.

En este sentido no existe una contraposición entre una norma inferior y una norma superior, ni se han obviado las etapas probatorias y tampoco era deber del Despacho informar al ente territorial su incumplimiento a un requisito con anterioridad a la expedición de la resolución que decidió el proceso de certificación para la vigencia 2015 toda vez que los resultados del proceso de certificación que corresponde a la evaluación de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, se ponen en conocimiento por medio de una resolución a más tardar el 30 de septiembre de la respectiva anualidad, conforme a lo establecido en el artículo 2.3.5.1.2.1.9 *ibidem*.

En este orden de ideas, no se observa vulneración alguna a los principios establecidos en el artículo 103 del C.P.A.C.A. y tampoco a los derechos al debido proceso, a la igualdad, eficacia, defensa, transparencia, representación, imparcialidad, contradicción y lealtad.

Ahora, con relación a los diagnósticos que publicó la Superintendencia, es de señalar que solo corresponden a un estado de información reportada y no a la calidad de la misma, esto se puso de presente a los municipios en dichos diagnósticos, en los siguientes términos:

*“Este documento corresponde a un estado de reporte de los formatos y formularios dispuestos en el SUI para acreditar el cumplimiento de la información señalada en el Decreto 1077 de 2015, con corte al **02 de mayo de 2016** y no contiene el análisis de la información cargada.”*

En este orden de ideas, no se observa comportamiento doloso alguno por parte de la Superintendencia toda vez que la calidad de la información reportada es de resorte del ente territorial, quien conoce y debe conocer la norma y en consecuencia está en su responsabilidad cargar y certificar lo exigido por esta, sin que ello dependa de la “capacidad de lectura” de la Superintendencia como lo alegado por el apoderado del recurrente, sino al conocimiento y cumplimiento de la norma que es deber del administrado y que para el caso concreto tal y como se señaló claramente frente al requisito incumplido, el municipio no se allanó a cumplir a cabalidad con este.

Así las cosas, se colige que el Despacho persiguió sus fines y la finalidad de la norma que no es otra que otorgar la certificación en materia de SGP – APSB 2015 a los municipios y distritos que acreditaran la TOTALIDAD de requisitos establecidos en la misma y de esta manera culminó la actuación administrativa respecto al MUNICIPIO DE DUITAMA – BOYACÁ adecuadamente, es decir, conforme a derecho.

Por consiguiente, se concluye la falta de idoneidad del presente argumento para desvirtuar jurídicamente lo dispuesto en la resolución de descertificación:

3.3 Del argumento relacionado con que el Despacho decretó pruebas en las actuaciones administrativas adelantadas a otros municipios

Manifestó que se violó el derecho fundamental a la igualdad, toda vez que a otros municipios se le brindó la oportunidad de aclarar en una etapa probatoria la certificación reportada inicialmente por estos y ello conllevó a que fuera certificados, no obstante al Municipio de Duitama se le dio un trato discriminatorio negándole ese privilegio antes de emitir la resolución de descertificación sin considerar que se trataba de un municipio de sexta categoría, aislado por la carente infraestructura vial de acceso sin fuente suficiente de generación de recursos y sin embargo diligente en el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Añadió que la Superintendencia, conocedora de su situación precaria en la prestación de servicios públicos, negó las oportunidades procesales que le brindó a otros municipios que cuentan con mejores condiciones económicas y sociales, teniendo para el ente territorial condiciones más drásticas y exegéticas y que de haberse tratado con igualdad el municipio hubiese obtenido el manejo de los recursos del SGP APSB ya que se trató del mismo error presentado con los otros entes territoriales.

En lo relacionado con que el Despacho haya decretado pruebas en otras actuaciones, respecto a otros municipios, se debe precisar que se si bien se apertura una etapa probatoria en otras actuaciones administrativas, ello se predicó respecto a supuestos de hecho diferentes a los que se relacionan con el hoy recurrente, lo que conlleva a que se hayan configurado circunstancias de tiempo, modo y lugar que no pueden relacionarse con la situación presentada para el caso concreto y por ende tampoco pueden ser objeto de controversia en esta instancia.

A su vez, en gracia de discusión se debe resaltar que cada proceso adelantado a un municipio en una vigencia determinada se trata de un proceso autónomo, que no puede incidir en el resultado de otro municipio o de otra vigencia, máxime cuando el Decreto 1077 de 2015 exige la revisión de requisitos anualmente, lo que aunado a que los documentos reportados por cada ente territorial son diferentes, deben ser estudiados independientemente conforme a lo requerido por la norma, *vbgr.* para el caso concreto, el Municipio de Duitama fue el único que reportó un oficio suscrito por un Técnico de Estratificación sin acreditar o por lo menos indicar que ejercía funciones de Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación, lo que hace único el caso del recurrente y por ende no permite compararlo con otros.

Lo anterior aplica a los autos proferidos en el año 2016, los cuales estuvieron enmarcados en circunstancias específicas diferentes a las acontecidas en el caso concreto y en las que el Despacho consideró que no existió claridad en la documentación reportada inicialmente y que, por la facultad que le asiste, podría aclararse mediante un auto de pruebas, situación que no se presentó con el Municipio de DUITAMA – BOYACÁ, respecto al cual el documento reportado no correspondía a lo exigido por la norma, circunstancia ya analizada en la resolución de descertificación y en el presente acto administrativo.

Por consiguiente no se evidencia el trato discriminatorio al que alude el recurrente y no se ha vulnerado el principio de igualdad, toda vez que las circunstancias expuestas por el recurrente respecto a otros municipios, difieren de su caso concreto y las actuaciones adelantadas por el Despacho respecto al MUNICIPIO DE DUITAMA, han sido en su totalidad con objetividad y conforme a derecho.

Sin perjuicio de lo expuesto se debe precisar que no es cierto que el municipio sea de categoría 6 y con independencia que así lo fuera, o de su situación económica, o si se encuentra o no aislado por la carente infraestructura vial de acceso, o que no tenga fuente suficiente de generación de recursos, afirmaciones que hace el recurrente con ocasión de su recurso de reposición, no es posible que estos factores incidan en la evaluación del cumplimiento del ente territorial a la norma, toda vez que, para el requisito en cuestión, esta no estableció factores de distinción por dichos efectos.

A su vez, el Despacho considera importante que el ente territorial actúe diligentemente, tal y como lo manifestó en su recurso de reposición, porque de esta forma puede lograr cumplir a cabalidad las obligaciones que le asisten, no obstante es claro que si el Despacho, en el cumplimiento de sus competencias verifica un incumplimiento a un requisito por parte de un

ente territorial en el proceso de SGP APSB 2015, la única consecuencia es la descertificación, salvo que se configuraran causales eximentes de responsabilidad las cuales no se alegaron ni se evidenciaron en el caso concreto.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el argumento en estudio no tuvo la vocación de desvirtuar jurídicamente lo dispuesto en la resolución de descertificación, el mismo no prospera.

3.4 De las consecuencias de una descertificación para el ente territorial

Adujo que la decisión adoptada es más técnica que jurídica y que ocasiona perjuicio a toda la comunidad ya que al ser descertificada nuevamente presentara un atraso respecto de una adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, toda vez que existe distancia entre el municipio y el departamento y la desatención de este último respecto a las necesidades de la comunidad representa el atraso de un año más *“(en el mejor de los casos)”*, respecto a la satisfacción de sus necesidades en cuanto a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Concluyó que la *“sesgada interpretación desarrollada por el ente evaluador”* conllevó a ocasionar un perjuicio real respecto a la aplicación del decreto reglamentario con supremacía a las formas al interés general de la comunidad de Duitama.

Solicitó se analizara la situación particular de municipio de Duitama el cual pertenece a la tercera categoría y haga aplicación de su carácter garantista respecto a la interpretación documental del municipio.

Con relación a lo argumento en estudio, se debe advertir al ente territorial que la decisión adoptada estuvo acompañada de un componente técnico y jurídico y no es cierto que de ser descertificado nuevamente se pueda afectar la prestación de servicios públicos en el ente territorial o que se haya causado perjuicio real alguno situación alegada por el recurrente pero que no fue demostrada por él.


En este orden de ideas, se le advierte que bajo ningún aspecto es válido que en el supuesto de confirmar la resolución de descertificación para la vigencia 2015, se pretendiera trasladar los efectos de ello a sus habitantes, quienes no pueden verse afectados en la adecuada prestación de servicios públicos, toda vez que si el municipio presupuestó tener la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones de dicha vigencia, debió cumplir íntegramente los requisitos establecidos en la norma o, de lo contrario, asumir las consecuencias que se originan por su incumplimiento sin causar perjuicio alguno a la comunidad.

Lo anterior, máxime cuando conforme al artículo 2.3.5.1.2.2.12 del Decreto 1077 de 2015, que establece *“los municipios y distritos que como resultado del proceso a que se refiere esta sección sean descertificados, no podrán administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico ni realizar nuevos compromisos con cargo a los mismos, desde la fecha en que quede ejecutoriado el acto administrativo en que se decida la descertificación, expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios... los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico asignados al municipio o distrito descertificado, serán administrados por el departamento que asuma las competencias previstas en el artículo 50 de la Ley 1176 de 2007 o la norma que la modifique, complemente o sustituya,”* y dichas competencias *“podrán ser delegadas en los términos legales”*, se debe tener en cuenta que, de confirmarse la resolución objeto de recurso, el departamento administraría los recursos y que para ello **está obligado a hacerlo conforme lo dispuesto en la Ley 1176 de 2007.**

No obstante lo anterior, respecto a la supuesta desatención del departamento al municipio, es claro que de considerarse por parte del ente territorial que hubo o hay una acción irregular debe ponerla en conocimiento de la autoridad competente, para que se adelanten las medidas pertinentes.

Finalmente, cabe nuevamente llamar la atención del apoderado del ente territorial toda vez que no existió una "sesgada interpretación desarrollada por el ente evaluador", ni ello conllevó a descertificar al municipio y tampoco un error de forma, como erradamente lo manifiesta el recurrente. La decisión adoptada en el acto administrativo recurrido fue consecuencia directa de la aplicación del Decreto 1077 de 2015 por su incumplimiento de fondo a uno de los requisitos taxativamente establecidos en el mismo, respecto a lo cual el Despacho no tuvo en dicha instancia opción distinta a la de descertificar al ente territorial.

Lo anterior, máxime cuando el ente territorial, con ocasión a su recurso de reposición allega la siguiente certificación y el decreto de funciones del técnico de estratificación, manifestando que con estos se corrige y aclara los posibles errores señalados en la decisión recurrida:



Quilama
Capital Ciudad de Bogotá

Municipio de Duitama
Usa Oficial

EL SUSCRITO TECNICO DE PLANEACION MUNICIPAL EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ASIGNADAS MEDIANTE EL DECRETO N° 122 DEL 26 DE ENERO DE 2016 "POR MEDIO DE LA CUAL SE NOMBRA AL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN MUNICIPAL"


CERTIFICA QUE:

De conformidad con el artículo 11 de la ley 505 de 1999, El municipio de Duitama aplica el formulario de encuesta tipo 1 establecida por la misma, y en aplicación de los artículos 101 de la ley 142 de 1994, ley 689 de 2001 y 732 de 2002, para lo cual expidió el decreto Número 143 del 02 de noviembre de 1999, "POR MEDIO DEL CUAL SE APLICA EL NUEVO ESTUDIO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA URBANA AL COBRO DE LAS TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS", y de la misma forma se agrega a la presente certificación que el municipio realiza dicha adopción de las estratificaciones urbana y rural siguiendo los lineamientos normativos legales vigentes para la fecha de la expedición de los decretos mencionados anteriormente.

De la misma forma la secretaria técnica del comité permanente de estratificación certifica que para la vigencia 2015 y a la fecha, los decretos anteriormente mencionados se encuentran vigentes y no han sido modificados.

E IGUALMENTE POR MEDIO DE LA PRESENTE, EL SUSCRITO CERTIFICA QUE LA ESTRATIFICACION ADOPTADA Y APLICADA DENTRO DEL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA 2015 ESTUVO CONFORME A LA METODOLOGIA NACIONAL TIPO I ESTABLECIDA.

Se expide a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).



PABLO COYENECHÉ G.
Técnico de Planeación
Secretario técnico comité permanente de estratificación

"(...)



Municipio de Duitama
Usa Oficial

DECRETO N° 122
(26 de Enero de 2016)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE NOMBRA AL SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACION MUNICIPAL Y SE DESIGNAN DICHAS FUNCIONES AL CARGO DE TECNICO DE PLANEACION MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS VECES"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE DUITAMA, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales y en especial las conferidas por el artículo 315 Constitucional y la ley 1551 de 2012,

(...)



Municipio de Duitama
Usa Oficial

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: nombrar como SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN al funcionario **PABLO GOYENECHÉ GÓMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.207.707 de Paz de Río en ejercicio de sus funciones como técnico de estratificación del municipio de Duitama.

(...)"

En efecto, con ánimo garantista este Despacho procedió a verificar la certificación aportada por el ente territorial con ocasión al recurso de reposición advirtiendo que está proferida por el Técnico de Estratificación quien en el nuevo documento se identifica como Técnico de Planeación y Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación, acreditando esta última calidad. A su vez y en dicha certificación se señala expresamente "... QUE LA ESTRATIFICACIÓN ADOPTADA Y APLICADA DENTRO DEL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA 2015, ESTUVO CONFORME A LA METODOLOGÍA NACIONAL TIPO I ESTABLECIDA", lo que aclara el documento reportado inicialmente, por lo que de manera excepcional se tendrá con la misma cumplido el requisito atinente a reportar al SUI la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida.

No obstante, se advierte que el ente territorial en las siguientes oportunidades deberá adelantar el procedimiento necesario para reportar al SUI la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada cumple **todos** los términos de la norma, sin que haya lugar a que este Despacho acepte nuevamente circunstancias como las presentadas en el caso concreto.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR la Resolución No. SSPD 20164010052895 del 30 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- CERTIFICAR al Municipio de DUITAMA del Departamento de BOYACÁ, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente de la presente resolución al alcalde del MUNICIPIO DE DUITAMA del Departamento de BOYACÁ, haciéndole entrega de una copia de la misma y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR, una vez en firme, el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de BOYACÁ, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C.



CARLOS ANDRÉS BERNAL CASAS

Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Katherine Arenas - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Revisó: María Eugenia Sierra Botero— Abogada Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente No. 2016401351600870E